

## **El Tribunal Supremo ratifica la nulidad de la tasa municipal sobre la telefonía móvil**

El Tribunal Supremo ha ratificado la nulidad de las tasas municipales impuestas por cientos de ayuntamientos españoles a las operadoras de telefonía móvil por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

El Tribunal Supremo había planteado al TJUE cuestiones prejudiciales en relación con la interpretación del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. El Tribunal Supremo dudaba acerca de la competencia de los Estados miembros para extender el canon por derechos de instalación de recursos, tanto al titular de la red de telecomunicaciones electrónicas,

como a los operadores que prestan servicios de telefonía móvil utilizando redes que no son de su propiedad.

El 12 de julio de 2012, el TJUE dictó sentencia en la que señalaba que, únicamente puede ser deudor del canon por derechos de instalación de recursos el titular de dichos derechos, propietario, asimismo, de los recursos instalados.

Sobre la base de esta sentencia, el Alto Tribunal ha dictado en el mes de octubre sentencias por las que estima los recursos de casación presentados por distintas operadoras de telefonía móvil. El TS anula los artículos de las ordenanzas fiscales que aprueban dichas tasas, en los que se imputaba una tasa por ocupar dominio local a los

operadores que usan las redes de otros operadores de telefonía fija para prestar servicios de telefonía móvil.

El TS ha anulado también el método de cuantificación de la tasa basado en los ingresos, ya que este no se ajusta al valor de mercado de la utilidad del uso del dominio público local, método establecido en la Ley de Haciendas Locales.

Estas sentencias del TS ponen fin a una lucha que viene enfrentando a ayuntamientos y operadoras de telefonía móvil desde hace años, y sientan la base para la resolución de miles de recursos todavía pendientes en el TS, así como en instancias inferiores.

### **En marcha las nuevas normas de prevención del fraude fiscal**

Se ha publicado la Ley 7/2012 que contiene una batería de medidas que pretenden impactar en nichos de fraude detectados y perfeccionar las normas que garantizan el crédito tributario con el fin de actualizarlas o de aclarar su correcta interpretación para incrementar la seguridad jurídica.

Además, merece destacarse una serie de normas como son la posibilidad de adopción de medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública, la limitación de pagos en efectivo o el establecimiento de nuevas obligaciones de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero.

### **La regulación del juego bajo el examen de la Comisión Europea**

La Comisión Europea ha publicado un plan de acción con el objeto de clarificar la regulación del juego online y fomentar la cooperación entre los Estados miembros.

Esta iniciativa no pretende llevar a cabo una regulación europea del juego online, sino establecer una serie de principios generales que rijan la regulación en los distintos Estados, centrándose, sobretudo, en la protección de los menores, de las personas que hayan sufrido la adicción al juego, y la prevención del fraude y del blanqueo de capitales.

Para ello, se creará un grupo de expertos para facilitar el intercambio de experiencias con respecto a la regulación del juego online en los distintos Estados miembros.

# Desarrollo de la reforma laboral

Se han publicado dos Reales Decretos que vienen a profundizar en la reforma laboral. En concreto, el Real Decreto 1483/2012 aprueba el esperado Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, que regula el período de consultas, la información a facilitar a los representantes de los trabajadores, las actuaciones de la autoridad laboral y de la Inspección de Trabajo, los planes de recolocación externa para los supuestos de despido colectivo que afecten a más de cincuenta trabajadores, y las medidas de acompañamiento social asumidas por el empresario.

El Real Decreto 1484/2012 regula

las aportaciones económicas de las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos a trabajadores de 50 años o más. Se aplicará a las empresas o grupos de más de cien trabajadores, que hayan tenido beneficios los dos últimos ejercicios, que realicen despidos colectivos que incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad. Se regula el procedimiento para la liquidación y el pago de las aportaciones, incorporando aspectos instrumentales y cuestiones técnicas necesarias, para que los órganos competentes puedan liquidar y recaudar el pago de las mismas y desincentivar el despido de los trabajadores por razón de su edad, promoviendo así

la recolocación del personal de más edad.

Ambas normas entraron en vigor el día 31 de octubre. Habrá que estar muy atentos a las interpretaciones de los Tribunales para saber si continúan declarando la improcedencia o incluso la nulidad de los despidos colectivos por defectos formales o incumplimientos de los periodos de consultas y de la puesta a disposición de la documentación a los representantes de los trabajadores, tendencia polémica iniciada por la Audiencia Nacional y continuada por la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia.

## ***La Administración obligada a devolver impuestos como consecuencia de incumplimientos comunitarios***

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a devolver a una entidad alemana 1,5 millones de euros por cobro indebido del Impuesto sobre Operaciones Societarias al haberse vulnerado el Derecho de la Unión Europea sobre la libre circulación de capitales. Esta sentencia se basa en la del TJUE de 9 de julio de 2009, la cual declaró que la norma española que gravaba a sucursales de empresas de Estados miembros no cumplía con el principio de libre circulación de capitales, al hacer tributar incorrectamente la constitución de sucursales en España.

## ***La Administración interpretará la limitación a la amortización restrictivamente***

Miembros de la Administración tributaria están aclarando en diversas charlas y ponencias, que la limitación de la amortización al 70% para los periodos iniciados en 2012 y 2013 que introduce el Proyecto de Ley por el que se adoptan diversas medidas tributarias, debe aplicarse sobre el gasto registrado (siempre que esté dentro de los límites establecidos en las tablas), independientemente de que dicho gasto sea inferior al máximo fiscalmente permitido.

## ***El Supremo analiza los requisitos para la compensación de BINs de periodos prescritos***

El Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de septiembre de 2012, ha determinado los requisitos para la compensación de bases impositivas negativas procedentes de ejercicios prescritos.

El Tribunal Supremo señala que, la compensación de bases negativas con bases positivas generadas con posterioridad es una mera expectativa y no un derecho adquirido. Por tanto, cuando el sujeto pasivo decida ejercitar la facultad de compensar bases impositivas negativas deberá cumplir los requisitos formales exigidos por la norma en vigor en el momento de la compensación, más exigente que la norma aplicable en el ejercicio de generación de la base negativa.

## ***Consulta pública europea sobre el mercado de las telecomunicaciones***

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta pública con el fin de actualizar la lista de mercados de telecomunicaciones a los que los Estados miembros deben aplicar una regulación para asegurar el cumplimiento de las normas de competencia comunitarias. Concretamente, el objetivo del cuestionario es determinar las principales tendencias a través de una consulta, a cualquier parte interesada, sobre la revisión de la actual lista de mercados relevantes y su alcance, así como en los mercados que pueden ser añadidos a la lista, incluyendo aquellos regulados en el ámbito nacional e internacional.

**Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su contacto habitual en PwC o envíe un correo electrónico a [ticeposts@es.pwc.com](mailto:ticeposts@es.pwc.com).**

La información y comentarios que se incluyen en esta publicación no constituyen asesoramiento jurídico o contable alguno. PwC declina cualquier responsabilidad por la utilización que pueda hacerse del contenido de la misma.

© 2012 Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.